

La Lucha por la Maternidad Voluntaria

Mexico

The Right to Choose

por/by Heather Dashner

El 16 de marzo pasado el Departamento de Inteligencia de la policía capitalina mexicana allanó una clínica de abortos y detuvo a siete mujeres que habían abortado, al igual que a sus acompañantes y al personal médico. El 21 de marzo, cinco de los afectados llamaron a una conferencia de prensa, la cual tuvo mayor asistencia que cualquier otra relacionada con la problemática de las mujeres en los últimos años. Sus valientes declaraciones desataron una nueva polémica nacional sobre el aborto.

Teresa Juárez explicó: "Vine a la capital para hacerme un aborto en mejores condiciones que las que podía conseguir en mi pueblo. Tenía mucho miedo, pero me acompañó una amiga. La operación misma no fue tan mala. Lo malo vino después.

Llegó la policía cuando nos íbamos a casa y nos detuvieron. Nos decían putas, perras y asesinas. Nos llevaron a los separos de Tlaxcoaque, el centro de policía del Distrito Federal y nos tuvieron ahí hasta la mañana siguiente. Nos negaron las medicinas que nos había recetado el médico. Escuchábamos los gritos de otros presos y torturaron a uno frente a nosotras. Nos lo hicieron ver para asustarnos, creo. También nos pegaban, nospellizcaban; nos decían que nos iban a encerrar veinte años. A algunas nos desnudaron".

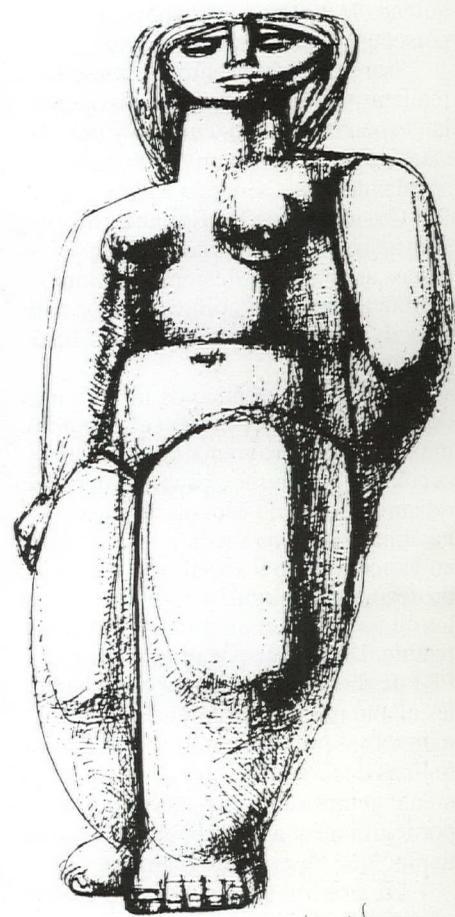
Rosario Villalobos declaró: "Como acompañante, me dejaron salir a la medianoche, después de doce horas de detención. Fui corriendo con una camarada mía y empezamos a buscar ayuda.

March 16 the Intelligence Bureau of the Mexican police in Mexico City raided an abortion clinic and detained seven women who had undergone abortions, as well as friends accompanying them and medical personnel. Five of these women called a press conference which, compared to others related to women's issues, received broad coverage. These women's brave statements sparked a new national debate on the issue of abortion:

"I came to the capital in order to get an abortion in better conditions than I could get in my town. I was very scared, but a friend came with me. The operation itself was not so bad. The terrible things came after. The police came when we were leaving and busted us. They called us whores, bitches and murderers. They took us to Tlaxcoaque, Mexico City's police headquarters, and kept us there overnight. They didn't let us have the medicine that the doctor had prescribed. We could hear the screaming of other prisoners and they actually tortured one of them in front of us. They made us witness this to scare us, I think. They also hit us and pinched us; they said they would lock us up for twenty years. They even undressed some of us."

Teresa Juarez at the press conference of March 21, 1989.

"Because I had only come as a friend, they let me go at midnight, after twelve hours of detention. I ran to the house of a friend and we got help. In the morning, together with Rosario Ibarra and Teresa Jardi, we managed to get an



En la mañana logramos junto con Rosario Ibarra y Teresa Jardí una entrevista con el Procurador del Distrito Federal que ordenó la libertad de las detenidas, pero no las terminamos de sacar hasta la medianoche".

La organización "Pro Vida" (intrauterina) asumió orgullosamente parte de la responsabilidad por la razzia, diciendo que ellos habían localizado la clínica, notificado a la policía, y que tenían una lista de doce clínicas más a ser cerradas. Clasificaron de "prostitutas y lesbianas" a las mujeres que piden la despenalización del aborto, diciendo que no representan al prototipo de la mujer mexicana, que es "una defensora de la familia". Prometieron lanzar una campaña de firmas para el aumento de la actual pena para el aborto, que equivalga a la que se impone por homicidio calificado.

Al mismo tiempo, la XLIV Asamblea Plenaria de Obispos Mexicanos reafirmó su condena al aborto voluntario, su oposición a la despenalización, la continuación de la excomunión a quienes lo realizan y su apoyo a la persecución policiaca del delito.

Por otro lado, cientos de mujeres realizaron una marcha-mitin exigiendo la despenalización del aborto y más de setecientas firmaron un desplegado señalando que "Ninguna Mujer Aborta Por Gusto". Entre las firmantes se encontraron no sólo feministas, opositores, artistas y profesionistas, sino también conocidas políticas del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esto es sintomático de las dificultades en las que se encuentra el gobierno mexicano. Su programa de "modernización", versión mexicana del neo-liberalismo del Fondo Monetario Internacional, combina medidas draconianas en lo económico y social, una mayor presencia del ejército y equipos especiales de policía, con un discurso democratizante. Desde que por primera vez el PRI perdiera las elecciones presidenciales el año pasado, asumiendo de todas maneras el primer mando su candidato Salinas de Gortari, lucha simultáneamente contra su propia crisis interna y por legitimarse ante el pueblo, al mismo tiempo que busca nuevos aliados.

En relación a las mujeres, Salinas puso especial énfasis durante su campaña electoral en su dedicación a "la incorporación de las mujeres al desarrollo", y "su entrada a la modernidad",

interview with Mexico City's Attorney General, who ordered the release of the detained women, but actually they didn't let them go until midnight."

Rosario Villalobos at the press conference of March 21, 1989.

The organization called "Pro Life" (intrauterine) proudly claimed responsibility for the raid, saying that they had found the clinic and notified the police. They also said that they had a list of twelve other clinics they would make sure are shut down. They called the women who are asking for the decriminalization of abortion "prostitutes" and "lesbians", saying that they do not represent the prototype of Mexican women, who are "defenders of the family". They also promised to launch a signature campaign to increase the punitive legislation for abortion, so that it is comparable to that of homicide.

At the same time, the XLIV Plenary Assembly of Mexican Bishops confirmed its condemnation of voluntary abortions, its opposition to their decriminalization, the continuing excommunication of those who practice them and its support to police action against them.

On the other hand, hundreds of women held a demonstration demanding the decriminalization of abortion and more than seven hundred signed a declaration entitled "No Woman Has an Abortion for the Heck of It". Among those who signed, there were not only feminists, opposition figures, artists and professionals, but also some well-known politicians belonging to the official party, the Revolutionary Institutional Party (PRI).

This is symptomatic of the difficulties that the Mexican government is going through. Its "modernization" program, the Mexican version of International Monetary Fund neo-liberalism, combines Draconian economic and social measures and a greater profile of the armed forces and special police squads, with a democratic discourse. As well, since the PRI's first historic defeat in last year's presidential elections -after which, nonetheless, its candidate Salinas de Gortari assumed office- the party has been fighting its own internal crisis while trying to gain legitimacy with the Mexican people and new political allies.

Concerning women's issues, Salin-

COLOMBIA

En Colombia la cifra aproximada de abortos realizados en hospitales, clínicas y consultorios particulares y por personas con algún tipo de conocimiento médico como yerbateros, farmaceutas o comadronas, es de un millón al año.

A nivel nacional el aborto se encuentra entre las primeras 20 causas de muerte de mujeres entre los 15 y los 44 años. Por cada 100 mujeres, mueren 23 por motivos relacionados con embarazo, parto o abortos mal logrados.

La ley penal sanciona a la mujer que en forma dolosa se provoque un aborto o preste su consentimiento para que otra persona se lo practique, con pena de uno a cuatro años de prisión. El código también establece agravación de la pena en caso de que el aborto sea practicado por médico, cirujano o partera.

La legislación vigente sobre el aborto en Colombia, no permite su realización por razones eugenésicas, sociales o económicas.

COLOMBIA

In Colombia, approximately one million abortions a year are performed. They take place in hospitals, clinics and doctors' offices and are done by people with some medical knowledge such as medicine women, pharmacists or untrained midwives.

At a national level, abortion is one of the top 20 causes of death in women between the ages of 15 and 44. For every 100 women, 23 die due to complications related to pregnancy, delivery or botched abortions.

The law punishes with one to five years in prison those women who either induce their own abortions or allow another person to practice an abortion on them.

The penal code also establishes more severe sentences when the abortion has been practiced by a doctor, a surgeon or a midwife with formal training.

Current Colombian legislation does not allow the practice of abortions for social, economic or therapeutic reasons.

NICARAGUA

A diez años del triunfo de la Revolución Sandinista, la ley que penaliza el aborto inducido sigue en pie en Nicaragua, aunque según declaraciones de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) "en realidad esta ley no está siendo aplicada, porque con sobradas razones la voluntad popular considera el aborto como un problema social y no penal".

Este año la Asamblea Nacional comenzó a discutir la derogación de la ley que penaliza el aborto y su reemplazo por legislación que proteja la salud de la mujer en este aspecto. Se espera que la nueva legislación sea aprobada en un futuro próximo.



NICARAGUA

Ten years after the triumph of the Sandinista Revolution, the legislation that criminalizes the practice of induced abortions in Nicaragua is still in place. However, as the spokespersons of the Association of Nicaraguan Women Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) say, "in reality this law is not being applied, because for obvious reasons popular will does not consider abortion to be a criminal problem but a social one".

This year the National Assembly began to discuss the repeal of the law that criminalizes abortion and its replacement by legislation that will protect women's health in this area. The new legislation is expected to be approved in the near future.

en base al fortalecimiento de la familia. Sin entrar a discutir las contradicciones que esta perspectiva encierra, era obvio que su política económica no permitiría cambios positivos para las mujeres en materia de empleo, educación, salud, o servicios públicos. Lo que sí parecía posible eran algunos cambios a nivel legislativo en materia jurídica, en relación a la igualdad formal y la violencia.

Pero también Salinas se ha acercado a la jerarquía eclesiástica, medida atrevida en un país cuya constitución expresamente niega el reconocimiento de la misma. A pesar de que el gobierno mexicano realiza una fuerte campaña de control natal y ha negado su cooperación con los Pro Vida (intrauterina), no ha querido enfrentarse con la Iglesia y la derecha (tanto dentro como fuera del PRI), para cambiar los artículos del Código Penal (circa 1931) referentes al aborto.

Estos castigan a la mujer que aborta voluntariamente, disminuyéndose la pena si es de "buena fama", si su embarazo es resultado de una unión "ilegítima" y ... lo ha logrado esconder. Permiten formalmente el aborto terapéutico en el caso de violación, pero es virtualmente imposible conseguir el permiso para realizarlo.

A pesar de ello, cientos de miles de mexicanas abortan cada año, el 96.5% en la clandestinidad. Hoy, un aborto hecho por un médico cuesta entre dos y tres veces el salario con el que vive la mayoría de las familias mexicanas durante un mes. Por lo mismo, una buena parte de los abortos clandestinos se realizan en pésimas condiciones de higiene, resultando en infecciones, hemorragias, y muerte. La cuarta parte de las camas de los servicios gineco-obstétricos son ocupadas para atender secuelas de aborto.

Sin embargo, el acercamiento salinista a la Iglesia, las razzias a las clínicas, los esfuerzos redoblados de los Pro-Vida (intrauterina), y la visita del Papa programada para el próximo año, no auguran cambios importantes con respecto al aborto si es que depende del régimen.

Pero un cambio sustancial depende también de lo que hagan las afectadas, las propias mujeres.

La exigencia de decidir sobre nuestra maternidad no es nueva en México. Antes de la Revolución, grupos anti-porfiristas ya demandaban la

nas' presidential campaign put special emphasis on his dedication to "integrating women into development" and facilitating their "entry into modern society", on the basis of the strengthening of the family. Leaving aside the contradictions in his proposals, it was obvious that Salinas' economic policies would not allow for positive changes for women in the areas of unemployment, education, health or public services. What did seem possible were some cosmetic changes in legislation concerning formal equalities and violence.

However, Salinas has also gotten closer to the Church hierarchy, a bold step in a country whose constitution expressly negates recognizing this institution. In spite of the fact that the Mexican government carries out a strong population control campaign and has denied its support to "Pro Life" (intrauterine), Salinas has not wanted to confront the Church and the political right (both inside and outside the PRI) by changing the legislation that criminalizes abortion (in place since 1931).

This legislation punishes women who voluntarily undergo an abortion, decreasing the sentence if she has a "good reputation", if the pregnancy is the result of an "illegitimate" relationship and ... if she has managed to hide it. Therapeutic abortions are formally allowed in cases of rape, but it is practically impossible to obtain permission to practice them.

In spite of this, hundreds of thousands of Mexican women undergo abortions every year, 96.5% clandestinely. Nowadays, an abortion practiced by a doctor costs two or three times an average monthly salary. For this very reason, a good number of clandestine abortions take place in terrible conditions of hygiene, resulting in infections, haemorrhages and death. One out of every four beds in the gynecological and obstetric wards are occupied by patients who are victims of botched abortions.

Nevertheless, Salinas' closeness to the Church, the raids on abortion clinics, the growing activity of the "Pro Life" (intrauterine) organizations and next year's visit by the Pope, are not propitious for significant changes with respect to abortion if they depend on the government.

But a substantial change also depends on what we women, those directly affected, do about them.

Our demands for our right to choose

despenalización del aborto. En el auge social de los años treinta, época de consolidación del actual Estado mexicano, se planteó lo mismo. En los años setenta, el naciente movimiento feminista volvió a exigir el derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria.

La maternidad voluntaria combina diversas demandas que apuntalan al derecho de las mujeres a tener *todos* los hijos que queramos, y *sólo* los que queramos. Responde, en ese sentido, a una amplia gama de necesidades sociales y políticas relacionadas con la maternidad en un país subdesarrollado. Comprende la exigencia de una educación sexual científica, estableciendo el derecho del ser humano al placer; anticonceptivos efectivos y no dañinos (por ejemplo, el diafragma ni siquiera se manufactura en México); un alto a las esterilizaciones forzadas (más de un millón de mujeres han sido esterilizadas bajo el programa estatal de control natal); un alto a la discriminación a las madres trabajadoras (exámenes de no-gravidez al solicitar empleo y despido de mujeres embarazadas, por ejemplo); y el derecho a petición de la mujer, a abortar de manera gratuita en una institución de salud pública.

Desde que el movimiento feminista desarrolló estos conceptos, a finales de los años 70, y presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados -desde entonces congelado por la mayoría priista- el movimiento de mujeres ha retomado otro aspecto, la lucha contra la mortalidad materna.

El VI Encuentro Nacional Feminista, realizado en julio de este año, acordó realizar una campaña nacional por la maternidad voluntaria que seguramente retomará, de manera particular en cada lugar del país, la mayoría de estos planteamientos.

Hoy la campaña por la maternidad voluntaria tiene ventajas importantes en relación a la que se hizo hace una década. Por un lado, el movimiento de mujeres organizadas se ha extendido a miles de mujeres de los sectores populares, entre ellas muchas feministas, y por otro, el régimen político priista se encuentra en la crisis más importante de su existencia. Alcanzar nuestras metas dependerá de muchos factores, pero las mujeres tenemos claro que nuestra lucha por la maternidad voluntaria debe continuar hasta que nosotras nos encontremos satisfechas.

are not new in Mexico. Before the Revolution, anti-Porfirio Diaz * groups were already demanding the decriminalization of abortion. During the social upsurge of the 30's, when the current Mexican state was consolidated, the same demand was put forward. In the seventies, the emerging feminist movement again demanded the right of women to voluntary maternity.

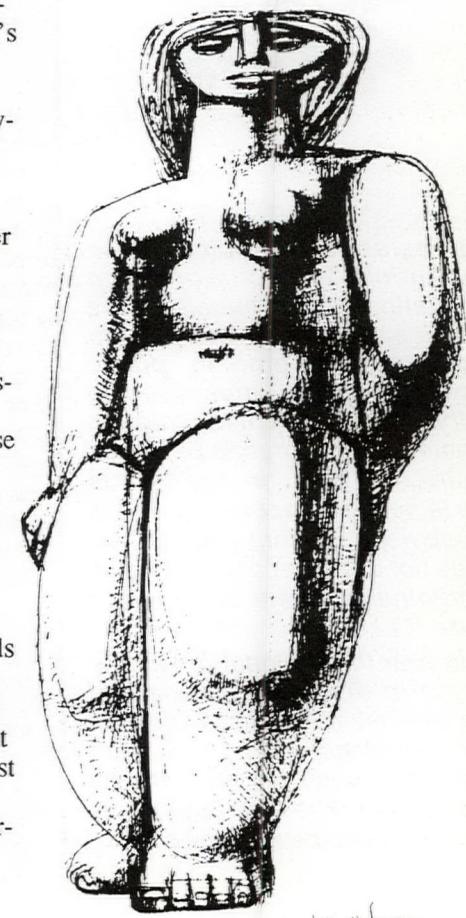
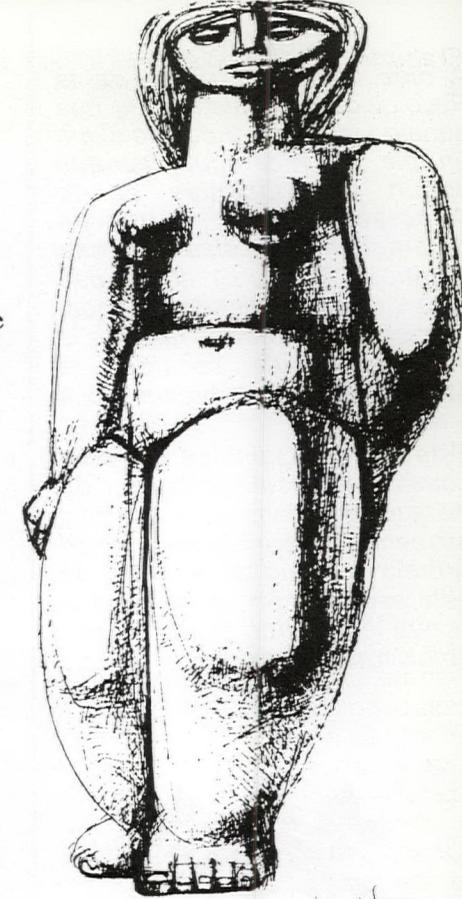
The right to choose combines diverse demands aimed at the right of women to have *all* the children we want and *only* as many as we want. In this sense, it is linked to a broad spectrum of social and political needs related to maternity in an underdeveloped country. It covers our demand for scientific sexual education that establishes a human being's right to pleasure; effective and safe contraceptives (for example, the diaphragm is neither manufactured nor sold in Mexico); a stop to forced sterilizations (more than a million women have been sterilized through state population control programs); an end to discrimination against working mothers (non-pregnancy tests when applying for a job and the firing of pregnant women, for example); and the right to a free abortion on demand, in a public health facility.

Since the feminist movement developed these concepts at the end of the 70's and presented draft legislation to the Chamber of Deputies -subsequently frozen in committee by the PRI majority- the women's movement has taken up another aspect, the struggle against maternity-related deaths in general.

The VI National Feminist Encounter that took place in July of this year, agreed on carrying out a national campaign for voluntary maternity. This will probably restate, with some regional differences, the majority of these proposals.

The campaign for the right to choose has some important advantages today, compared to the one that took place ten years ago. On the one hand, the organized women's movement has grown to include thousands of women in the popular sectors, among them many feminists; at the same time, the PRI finds itself in the most important crisis of its history. Reaching our goals will depend on many factors, but for us it's clear that our struggle for voluntary maternity must continue until we women are satisfied.

*Porfirio Diaz was the dictator overthrown by the 1910 Revolution.



CHILE

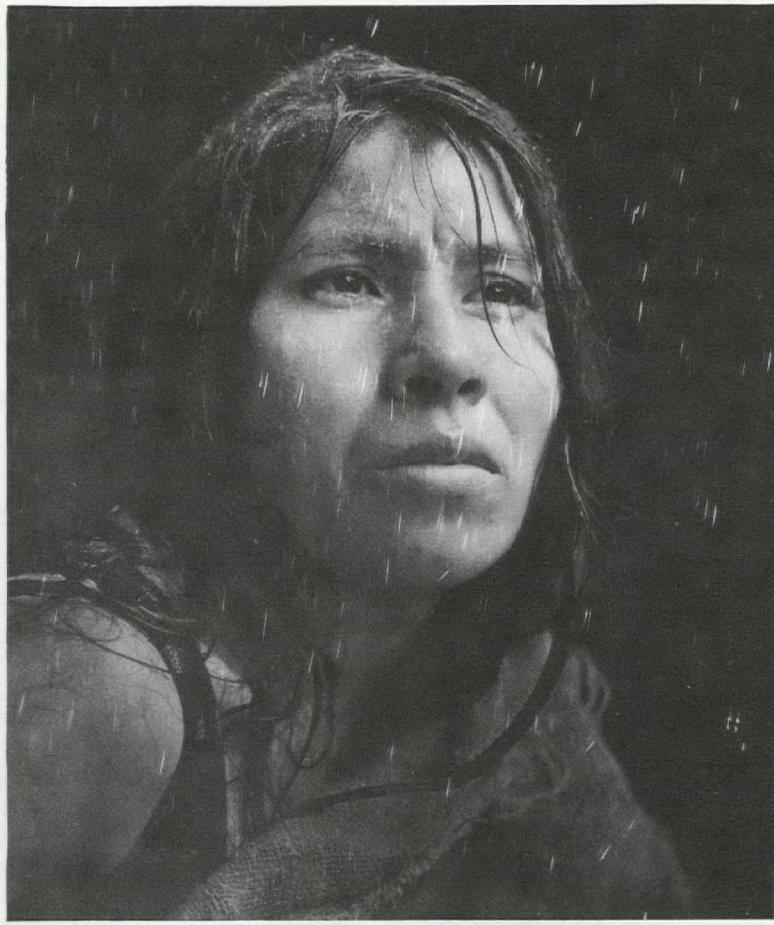
El aborto clandestino es la primera causa de mortalidad materna en Chile. Por cada dos nacidos vivos, se practica un aborto. Cada año se realizan entre 120.000 y 190.000 abortos clandestinos. De éstos, 110.000 son practicados a jóvenes menores de 23 años.

Según la ley chilena, un embarazo sólo puede ser interrumpido con fines terapéuticos y la medida debe estar avalada por la opinión de dos médicos cirujanos. El aborto provocado sin indicación médica es un delito castigado en el Código Penal, con penas de cárcel tanto para la persona que lo practica o coopera con ella, como para la mujer que lo solicita o se lo autoinduce.

Como si la legislación actual no fuera suficiente, el régimen pretende aumentar estas penas al grado de presidio mayor. Esta iniciativa del gobierno militar ha suscitado gran polémica. Por un lado, la Iglesia Católica ha reiterado su posición de que "el aborto es una directa violación del derecho fundamental a la vida del ser humano". Por otro, un sinnúmero de organizaciones de mujeres ha declarado que el aborto en Chile es un grave problema social, y que el incremento de su penalización no va a solucionarlo. En un comunicado de prensa, de abril de este año, las representantes de doce organizaciones sociales y políticas hicieron un llamado a todas las mujeres "para que juntas asumamos un compromiso con nosotras mismas y con la sociedad que queremos construir", ya que "en materias específicas que nos conciernen a nosotras las mujeres, no estamos dispuestas a seguir aceptando que se legisle sin nuestra directa participación".

CUBA

En Cuba los programas de educación y salud están dirigidos fundamentalmente a la difusión de métodos contraceptivos y se inculca el reservar el uso del aborto inducido sólo como una solución de emergencia. Sin embargo, si la mujer decide interrumpir un embarazo, el aborto es no sólo legal y gratuito, sino que practicado por personal calificado en las instituciones especializadas del Ministerio de Salud.



CHILE
Clandestine abortion is the number one cause of maternal deaths in Chile. For every two newborns, there is one abortion. The yearly rate of clandestine abortions is between 120,000 and 190,000. Of these, 110,000 are practiced on women under 23.

According to Chilean legislation, a pregnancy can only be interrupted for therapeutic reasons and the abortion must have the consent of two surgeons. Abortions lacking this medical approval are punished by the penal code with jail sentences for both the person that practices or cooperates with the abortion, and the woman who has solicited or self-induced it.

As if current legislation were not sufficient, the regime intends to greatly increase the sentences.

This initiative of the military government has triggered much debate. On the one hand, the Catholic church has confirmed its position, i.e., that "abortion is a direct violation of the fundamental right to life of every human being". On the other hand, many women's organizations have declared that abortion in Chile is a severe social problem and that the increase of punitive legislation will not solve it. In a press release in April of this year, the representatives of twelve social and political organizations called on all women "to get together and assume a commitment with ourselves and with the society that we want to build", since "in matters that concern us specifically, we women are not prepared to continue accepting legislation that has been passed without our participation."

CUBA

In Cuba, education and health programs are basically directed to spreading the use of contraceptive methods. These programs firmly suggest that an induced abortion should only be used as an emergency solution. However, if a woman decides to interrupt a pregnancy, abortion is not only legal and free of charge, but practiced by qualified personnel in specialized clinics sponsored by the Ministry of Health.

Translation: Heather Dashner

